



- ◆ Trabajo realizado por la Biblioteca Digital de la Universidad CEU-San Pablo
- ◆ Me comprometo a utilizar esta copia privada sin finalidad lucrativa, para fines de investigación y docencia, de acuerdo con el art. 37 de la M.T.R.L.P.I. (Modificación del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual del 7 julio del 2006)

El narcotráfico en Colombia

Rafael Pampillón y Gérard Verna

LA producción, tráfico y consumo de drogas ha alcanzado una gran magnitud en todo el mundo. En Colombia, el problema ha adquirido connotaciones muy particulares, al ser este país el mayor traficante de hoja de coca, pasta básica y, sobre todo, cocaína.

La ilegalidad de la industria de la droga le imprime un carácter peculiar: el crimen organizado, la violencia y la corrupción son sus componentes naturales. El narcotráfico ejerce su poder para penetrar en las estructuras de la sociedad civil, intervenir en las redes de toma de decisiones y controlar parte de los territorios nacionales, además de usar la fuerza a través de grupos paramilitares que desestabilizan los Estados e imponen sus propias leyes y valores, violando los derechos humanos y poniendo en peligro la permanencia del sistema democrático.

Las drogas afectan a la salud de quienes las consumen y en particular la de los jóvenes y niños. Las diversas opciones para combatirlas se discuten en los países afectados y se han convertido en una cuestión internacional. Bajo el liderazgo de las Naciones Unidas se está configurando una política basada en el principio de responsabilidad compartida, en el respeto a la soberanía de los Estados, en la eliminación del uso de la fuerza y en la no injerencia en los asuntos internos de los países, todos objetivos loables pero quizá contradictorios.

La economía de la droga relaciona la producción, la comercialización y las finanzas en una intrincada red que hace caso omiso de las fronteras nacionales y se extiende a todos los continentes. Su carácter clandestino dificulta el análisis de sus efectos en las sociedades involucradas en la producción, tráfico y consumo de estupefacientes.

La obtención de cifras exactas sobre el comercio de la droga se complica debido a que el blanqueo de dinero proveniente de las ganancias ilícitas se efectúa al amparo de la estructura bancaria legal y aprovecha la existencia de paraísos fiscales y del secreto

Rafael Pampillón es catedrático de la universidad San Pablo y profesor del Instituto de Empresa, Madrid. **Gérard Verna** es director de la cátedra de Ética en los Negocios, Instituto de Empresa y profesor de la universidad Laval, Quebec (Canadá).

bancario vigente en algunos países. Los lazos con otras organizaciones criminales ponen a disposición de los narcotraficantes colombianos medios considerables. Valga como muestra el siguiente ejemplo:

“Otra operación típica de la red paralela del Banco de Crédito y Comercio Internacional (BCCI) se desarrolló en abril de 1989, cuando una carga enviada desde Colombia fue durante la noche llevada al muelle de Karachi (Pakistán). Los operadores volvieron a bordo después de haber sobornado a los aduaneros paquistaníes con 100.000 dólares. Ellos mismos descargaron grandes cajas de madera que traían muchos contenedores. Según un cargador que estuvo presente, utilizaron una grúa en lugar de una carretilla elevadora, debido al peso de las cajas, que luego eran transportadas por camión a una pista de aeropuerto discreta y cargadas en un Boeing 707 no identificado. El avión partió hacia Checoslovaquia tomando para el control aéreo el número de un vuelo regular de la compañía aérea Pakistan International Airlines. Este vuelo comercial había sido anulado en el último minuto gracias a los cómplices que se encontraban en la misma compañía aérea. El radar del 707 había sido modificado para poder indicar el código del vuelo comercial y no ser objeto de sospecha al sobrevolar los distintos países. El avión había volado desde Checoslovaquia a Estados Unidos sin que los que ejecutaban esta operación supieran realmente lo que se encontraba en el interior de las cajas, las cuales podrían contener drogas o armas de fuego”.¹

El enorme volumen de dinero que ingresa Colombia por la industria de la droga repercute inmediata y directamente en sus estructuras económicas y financieras. Es necesario que el análisis macroeconómico considere su presencia e incorpore las cifras de la economía paralela en las estadísticas oficiales, aunque sólo se cuente con aproximaciones que no reflejan la magnitud real del fenómeno.

Fernando Brito, director de la DAS (policía secreta de Bogotá), estima que 7.000 millones de dólares son blanqueados en la economía colombiana.² Pero, según otros analistas, estas ganancias anuales habrían sido, en 1987, de 5.000 millones de dólares, de los cuales entre 1.000 y 1.500 habrían sido reciclados en el sistema financiero nacional de los tres países andinos.³

1. Jonathan Beaty y S. G. Gwynne, “The dirtiest bank of all”, *Time*, 29 julio 1991, cit. p. Gérard Verna y Jean-Claude Usunier, *La grande triche*. París: Editions de la Découverte, 1994.

2. Marcel Niedergang, “Pays Andins: le cercle infernal de la drogue”, *Le Monde*, París, 29 junio 1994.

3. Véase “The cocaine economies”, *The Economist*, 8 octubre 1988 y Bruce Baglay “Colombian and the war on drugs”, *Foreign Affairs*, vol. 67. núm. 1, 1988.

Un estudio de la universidad de Antioquía (Colombia) estima que los ingresos de narcodólares, a través del Banco de la República, oscilan anualmente entre 600 y 800 millones de dólares. Según Rudolf Hommes Rodríguez, ministro de Hacienda de Colombia, "no hay ningún estudio serio sobre el asunto y creo que nunca lo podremos tener, porque no es fácil determinar qué parte de las transferencias proviene del tráfico de drogas. Pero si uno mira los últimos estudios sobre flujos de capital no explicados, no podrían ser más de 300 o 400 millones de dólares por año y esta cifra incluye la repatriación de capitales en la cuenta de servicios".⁴

Si la cifra fuese de más de mil millones de dólares, esas ganancias representarían en 1987 un 18 por cien del valor total de las exportaciones legales del país (5.700 millones de dólares). Los ingresos por concepto de exportación de cocaína fueron superiores a los provenientes de las ventas de café, que sumaron 1.600 millones de dólares en 1993, y casi iguales al total de las exportaciones legales del país, que alcanzaron los 5.340 millones de dólares.⁵ El retorno de los fondos ilícitos producidos por la droga tiene un efecto distorsionador en la economía de Colombia, pues exagera la creación de mercados negros de divisas, el contrabando y la inflación de precios en sectores particulares.

La significación social de la droga

La adicción a las drogas y su tráfico ilegal adquieren proporciones alarmantes, porque están afectando cada vez más a la juventud y a los niños en edad escolar. La situación en que viven amplios grupos sociales indigentes, a los que la sociedad no brinda acceso regular a sus bienes y servicios, constituye la "mano de obra" de los narcotraficantes, quienes los comprometen en sus actividades y, al mismo tiempo, los inducen al vicio. En Colombia, los narcotraficantes son los héroes de una parte de la juventud e incluso de una parte de la población. En Medellín, Pablo Escobar ha tenido un gran entierro, con una muchedumbre de personas llorando su muerte; fue un bienhechor de los barrios pobres y empleador de un gran número de jóvenes.

La proliferación de las drogas se incrementó a partir de los años setenta y en la actualidad hay una mayor variedad de ellas, cada vez de mejor calidad y más potentes. Por el contrario, otros estupefacientes deben su bajo precio a sus peligrosos niveles de

4. Mario Arango Jaramillo, "Impacto del narcotráfico en Antioquía", Medellín (Colombia): Editorial J. M. Arango, 1988. Rudolf Hommes, "Los narcodólares no sustentan la economía colombiana", *El Comercio*, Lima, 16 mayo 1993.

5. Jorge Giusti, "Significación económica y social de la droga". *Revista del CEPAL*, núm. 45, diciembre 1991.

impureza, lo que les hace de fácil adquisición; el bazuco⁶ o el *crack* son ejemplos que ocasionan daños irreparables al organismo humano. Un estudio de la universidad de los Andes realizado en 1987 demostró que si más del 55 por cien de la población bebía alcohol y el 30 por cien fumaba, no había más que un 1,08 por cien que fumara marihuana, un 0,64 que tomara bazuco y un 0,25 que aspirara cocaína.⁷ El incremento experimentado en los últimos años en el consumo de narcóticos en el interior de un gran número de los países productores o de tránsito es una cuestión de creciente preocupación.

En las áreas urbanas, el fenómeno se manifiesta en el llamado "microtráfico", dadas las características de su organización en células pequeñas, su gran movilidad y su concentración por áreas o barrios, a cargo de grupos de pocas personas, casi siempre jóvenes y niños. Las ventas callejeras de pasta básica, de pitillos o bazucos, de marihuana y de dosis de heroína atraen a los innumerables desocupados de las capas más pobres, que se prestan a ejercer esta actividad, más rentable que otras que, por lo demás, no siempre están disponibles.

La violencia y la criminalidad asociadas con la droga y su distribución causan graves perjuicios en los barrios que están al borde del estancamiento económico. Las tentativas de abrir negocios de barrio se ven desalentadas, la asistencia a las escuelas se ve continuamente perturbada, las salas de urgencia de los hospitales rebosan de víctimas de sobredosis y de tiroteos, los residentes con ingresos estables encuentran razones para trasladarse a otros lugares y las habilidades y ambiciones que podrían aprovecharse de forma productiva se desperdician en la búsqueda ilusoria de rápidos beneficios a través del tráfico de drogas.

En el campo, a pesar de que la economía de la droga ha dado al campesino empleo y mejores ingresos, estos beneficios inmediatos han costado muy caros: el coste de la vida en las zonas "cocaleras" se ha elevado significativamente y el pago en efectivo ha sustituido a las formas tradicionales de trueque a pequeña escala y de apoyo mutuo que eran fuente de estabilidad y equidad dentro de las comunidades indígenas. En Colombia, decenas de millares de nuevos "colonos" han emigrado desde las cordilleras hasta los "llanos" para cultivar la coca, trastornando el equilibrio social anterior. Los productos alimenticios, como las patatas y el maíz, comenzaron a escasear a medida que la mano de obra era absorbida por los culti-

6. El bazuco, basuca o suco, es elaborado a partir de la pasta base. Es una cocaína mala refinada, la "cocaína del pobre", sulfato con efectos muy tóxicos.

7. Carlos Gustavo Arrieta y otros, *Narcotráfico en Colombia*, Bogotá: Tercer Mundo Editores y Ediciones Uniandes (universidad de los Andes), 1991.

vos de coca. La economía de autoconsumo fue reemplazada por una mercantilizada e impersonal, alejada del espíritu comunitario del campesino.

DROGA	COCAINA				HEROINA		
	País	produc.	fabric.	tránsito	blanqueo	consumo	produc.
Bolivia	x	x	x			x	
Colombia	x	x	x		x	x	x
Perú	x	x	x		x	x	
Ecuador	x	x	x		x	x	
Brasil	x	x	x		?	x	
Venezuela	x	x	x		x	x	
Argentina		x	x		x	x	
Chile	x	x	x		?	x	
Uruguay					x		
Guatemala			x		?	x	x
Panamá		?	x		x	x	
México			x		x	x	x
Cuba			x				

La repercusión social de la droga también se hace sentir en la estructura del empleo. En efecto, la industria de la droga es un empleador importante en Bolivia, Colombia y Perú. Ocupa directamente entre 600.000 y 1.500.000 personas, según diversas estimaciones (otras fuentes elevan este número a 1,8 millones, lo cual vendría a representar más de un 4,5 por cien de la población activa, es decir, cerca del tres por cien de la población total de estos tres países).⁸ Unas tres cuartas partes son agricultores y cosechadores de la hoja de coca; casi una cuarta parte la constituyen "pisadores" que, con los pies descalzos, mezclan las hojas con productos químicos no elaborados, como el queroseno, para hacer la "pasta"; unos cuantos miles trabajan en los laboratorios clandestinos en los que la pasta se convierte en cocaína refinada y unos mil—entre los que se incluyen los multimillonarios de los cárteles—dirigen las importaciones y exportaciones así como las finanzas. Además, un número mucho mayor de personas obtiene indirectamente sus medios de vida del efecto multiplicador que se hace sentir en las economías locales.

Otro efecto social de la droga fue la aparición del "narcoagro", que ha adquirido particular importancia en Colombia. Los "nuevos ricos" surgidos del tráfico ilegal de drogas consolidaron su poder económico y político casando a sus hijos con las herederas de las

8. Hernando Gómez, "El tamaño del narcotráfico y su impacto económico". *Economía Colombiana*, núm. 226-227, febrero-marzo 1990.

familias oligárquicas colombianas. Su conversión en neoterratenientes ha tenido evidentes efectos en la economía agropecuaria y en el sistema de tenencia de la tierra. Los estudios acerca del proceso agrario comenzado por los narcotraficantes coinciden en describirlo como una "contrarreforma agraria", ya que, contrariamente a lo buscado por los programas reformistas, ha vuelto a consolidar una estructura latifundista.⁹ Según un estudio, a finales de 1988 los narcotraficantes poseían un millón de hectáreas, es decir, un 4,3 por cien de las tierras productivas. La intervención de la economía de la droga en el negocio de las tierras repercutió en la forma de tenencia de ésta, ya que aumentó la propiedad (75 por cien en 1960 y 88 por cien en 1988) y se redujo el arrendamiento (del nueve al 3,2 por cien) y el colonato (del 14 al 5,6 por cien) en el mismo período.¹⁰

Por otra parte, según el mismo estudio, el área de influencia de los narcotraficantes se amplió con su participación en la producción agrícola nacional y en el crédito destinado a cultivos comerciales. Lo mismo sucedió en la ganadería, al tomar parte también en el sacrificio de ganado y el crédito. Entre quienes no les han vendido sus tierras hay que destacar que, por un lado, los terratenientes ricos se enfrentan a mayores costes de producción, en parte por los mejores salarios que pagan los narcoterratenientes y, por otro lado, los campesinos pobres dejan sus tierras o finalmente las malvenden por la situación de inseguridad y violencia a la que se ven sometidos. Junto a esto, el hecho de ir reemplazando a las antiguas familias terratenientes hace que el narcoagro imponga un ritmo distinto de cambio y explotación: incorpore la ganadería selectiva (en detrimento de la intensiva), los cultivos de palma africana, la cría industrial del camarón, algunos cultivos tradicionales como el arroz y el algodón y la industria avícola.

Según señala Reyes Posada, los narcotraficantes "se enfrentan a un doble reto: establecer por sí mismos la dominación social, al legitimarse como élite que reorganiza las relaciones sociales del campo y modernizar la producción agropecuaria, mejorando el nivel de vida de los trabajadores rurales y abasteciendo los mercados internos y externos".¹¹

El 1 de abril de 1991, el ministro de Relaciones Exteriores de Bolivia, Carlos Iturralde Ballivián, afirmó ante el Congreso de su país que el narcotráfico constituye una amenaza para la seguridad,

9. Alvaro Camacho Guizado, "Colombia: violencia y narcocultura", en Diego Carcia-Sayan (comp.): *Coca, cocaína y narcotráfico*. Lima: Comisión Andina de Juristas, 1989.

10. Libardo Sarmiento y Carlos Morento, "Narcotráfico y sector agropecuario en Colombia". *Economía Colombiana*, núm. 226-227, Bogotá, febrero-marzo 1990.

11. Alejandro Reyes Posada, *La violencia y la expansión territorial del narcotráfico*. Universidad Nacional de Colombia, junio 1989.

la soberanía y la democracia de la nación. Estas declaraciones no hacían más que confirmar el efecto desestabilizador que el narcotráfico está suponiendo para gran parte de América Latina y sus graves consecuencias: limitar la proyección del poder del Estado sobre el territorio nacional, poniendo en cuestión su control político sobre algunas zonas y enajenándole el apoyo de amplios sectores sociales. En Perú, el congresista Julio Castro, presidente de la subcomisión que estudia la problemática del narcotráfico, declaró en 1993: "La estrategia antidroga no funciona (...) El principal error es la ausencia de una estrategia de sustitución de cultivos (...) tenemos que luchar por la corresponsabilidad con Europa, Japón y Estados Unidos".¹²

El control del Estado

Asimismo, y como consecuencia del eficaz recurso a la corrupción o a la violencia por parte de los narcotraficantes, los gobiernos de la región ven minado el monopolio tanto sobre las decisiones políticas como sobre la capacidad de ejecutarlas, debido al socavamiento de la lealtad institucional de las fuerzas de seguridad, la administración pública y los tribunales de justicia que ejerce el narcotráfico. En algunas áreas de Colombia, los gobiernos locales no han logrado extender la autoridad del Estado a todo el territorio nacional, sobre todo en determinadas áreas remotas o inaccesibles. El narcotráfico profundiza esta incapacidad o la amplía a nuevas regiones o ciudades, al aprovecharse del precario control gubernamental ejercido sobre estas áreas, facilitando su asentamiento en enclaves autónomos, tanto en ciudades como en zonas rurales. Las redes delictivas debilitan la gobernabilidad de ciudades como Medellín o regiones enteras como Antioquía, ambas en Colombia, o las de Beni y Chaparé, en Bolivia. De esta manera, el narcotráfico contribuye a la neutralización parcial del poder y de las funciones del Estado en algunas regiones, al impedir una presencia permanente de la policía y de las fuerzas armadas, la normal celebración de elecciones o incluso la prestación de servicios públicos básicos y la realización de proyectos de desarrollo.

Así ocurre en el caso del oleoducto Vasconia-Coveñas, centralizado en la ciudad de Cauca, en la provincia de Antioquía. La situación socio-económica reinante en esta región es particular y no puede ser generalizada a toda Colombia y menos aún a todo el continente latinoamericano. Alrededor de Cauca es necesario tener en cuenta muchos factores: las guerrillas, los buscadores de oro, los propietarios de tierras, los narcotraficantes, el ejército y la

12. Julio Castro: "La estrategia antidroga no funciona", *Expresso (El Suplemento)*, Lima, 18 abril 1993

pobreza omnipresente. Estas llanuras tropicales del norte del país están infestadas por las tres principales guerrillas de Colombia (ELN, FARC y EPL).¹³ La parte sur de Cauca está enteramente bajo la dominación del ELN, habiéndose dado el caso incluso de que la bandera negra y roja de este movimiento haya ondeado alguna vez sobre los puestos de policía. Para sustentar sus reivindicaciones ideológicas, que consisten principalmente en reformas agrarias, estos movimientos viven de la extorsión, los secuestros y el tráfico de estupefacientes.¹⁴

En el ámbito nacional, la existencia de esta alianza tiende a empeorar la estabilidad política. Asimismo, el ejercicio de algunas facultades normalmente desempeñadas por el Estado es reemplazado en muchos casos por las redes de narcotraficantes. En algunas zonas rurales o urbanas, sobre todo en los países andinos, el narcotráfico ha logrado sustituir las funciones del propio Estado, al prestar servicios que los gobiernos municipales o centrales no suministran. Los cárteles en Colombia financian obras y servicios para sectores marginales en los campos sanitario y de vivienda; de esta manera, los narcotraficantes han conseguido una amplia base de apoyo popular entre las capas sociales menos privilegiadas, lo que implica una fuerte competencia para el Estado. Esta competencia queda reforzada por los estrechos contactos narco-guerrilla propiciados por la simultánea actividad desplegada en algunas zonas por ambos grupos. Grupos subversivos como el FARC desarrollan parte de sus acciones en regiones de cultivo de coca o de producción de cocaína.

Según ha revelado el comandante general Eduardo Bellido, en la zona de Huallaga, Sendero Luminoso recibe anualmente más de cien millones de dólares por protección al narcotráfico con los que financia sus actividades terroristas. Las cifras son realmente graves. Se afirma, en efecto, que las avionetas de los narcotraficantes realizan alrededor de diez mil vuelos por año en la zona del Huallaga y que por cada vuelo deben desembolsar un "cupó" de 15.000 dólares.

Las cifras disponibles sobre el valor económico de la producción y el comercio de drogas en América Latina son estimaciones o incluso conjeturas: la cantidad producida, refinada, exportada y consumida muestra un margen de variación de hasta tres o cuatro veces, e igualmente la información sobre el número de personas

13. ELN: Ejército de Liberación Nacional. EPL: Ejército Popular de Liberación. FARC: Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.

14. Gérard Verna y André Tchourbassoff, "La acción internacional en un medio ambiente hostil: el caso del oleoducto Vasconia-Coveñas en Colombia". *La gerencia para el desarrollo*. Lima: ESAN, 1991.

vinculadas al narcotráfico presenta una fuerte variabilidad en las diversas fuentes. La carencia de información suficientemente precisa y fiable hace difícil determinar el impacto global neto de las actividades relacionadas directa o indirectamente con el tráfico de drogas en el crecimiento y el desarrollo económico y social de los países productores o de tránsito de estupefacientes. Sin embargo, es posible destacar algunas características dentro del contexto específico del subcontinente y, más en detalle, de la experiencia de cada país, buscando individualizar elementos positivos y negativos para la economía.

Desde los años ochenta, el narcotráfico latinoamericano ha venido concentrando sus actividades en el procesamiento de coca y en el comercio de cocaína. Si se considera el promedio de los valores inferiores y superiores de las estimaciones de la producción global de la hoja de coca en los tres mayores países productores, Perú, Bolivia y Colombia, el crecimiento de la producción se calcula que ha aumentado el 300 por cien entre 1980 y 1993.

La introducción masiva de cultivos de coca —en el caso de Colombia también de marihuana (a menudo llamada marimba)— a finales de los años setenta y comienzos de los ochenta se dio en regiones en su mayor parte desatendidas por el Estado en las que existía un clima idóneo para éstos y donde predominaba una economía de subsistencia, determinada más por problemas de falta de infraestructura que por la escasa fertilidad de la tierra. En Colombia, ya en aquel entonces, se pusieron en funcionamiento laboratorios para la transformación en cocaína de la pasta de coca y comenzó la exportación ilegal hacia EE UU.

En 1989 algunos cálculos cifraron los cultivos de coca en Perú, Bolivia y Colombia en una superficie superior a las 250.000 hectáreas, es decir el doble de la superficie destinada al mismo cultivo cinco años antes¹⁵. Otras fuentes indican, sin embargo, que tan sólo en Perú se destinaban 260.000 hectáreas a ese cultivo, en Bolivia 70.000 y en Colombia 27.000.¹⁶ El tamaño predominante de los sembrados es de pequeña escala. En torno al 90 por cien de la producción es transformada en pasta básica y convertida posteriormente en cocaína.

Otro aspecto negativo es la utilización de los ingresos del narcotráfico para inversiones en actividades ilícitas, o inversiones improductivas en el exterior, sobre todo en instituciones financieras fuera del país. La difusión del cultivo de coca aumenta además la

15. Christian de Brie: "Des cultures illicites imposées par la loi du marché", *Le Monde Diplomatique*, París, octubre 1989. En el mismo tiempo, los precios habían bajado de 1.550 hasta 500 dólares los 500 kilos de hojas secas.

16. Laura López, "Cocaine's trapped growers", *Time*, Toronto, 8 noviembre 1993.

dependencia respecto a la importación de productos alimenticios básicos. Se ha señalado igualmente que la fuerte presencia de estas actividades en América Latina influye indirectamente sobre la tasa de crecimiento de los precios. En las regiones de producción de droga se genera una presión al alza de los salarios en la industria y presiones inflacionarias en la construcción y en el sector de artículos de consumo suntuarios. Según algunos observadores, sin embargo, estas presiones inflacionarias no son más importantes que las que emergen de cualquier otro producto de exportación que se encuentre en expansión.

Un aspecto importante reside en que el fuerte flujo de narcodólares en la economía nacional puede causar problemas para la eficacia y autonomía de la política monetaria. El crecimiento imprevisto de las reservas internacionales que resulta de los narcodólares que afloran en la economía obliga a las autoridades monetarias a emitir moneda a un ritmo más acelerado, lo cual debilita su capacidad para el control de la inflación y perturba el normal desarrollo de los programas de estabilización económica. Finalmente, la fuerte expansión del comercio exterior de drogas ha contribuido en algunos casos a mantener sobrevaluadas las monedas nacionales, alterando los precios relativos de los bienes nacionales e importados en perjuicio de los primeros. Al favorecer la importación de productos manufacturados y perjudicar al sector exportador nacional por la sobrevaluación de la moneda, se dificultan los esfuerzos de diversificación productiva de la economía. La tendencia de la economía nacional a depender de la producción de coca y sus derivados en la generación de divisas es un ejemplo de lo que se ha denominado "enfermedad holandesa". Incluso hay casos de cambio informal con tipos paralelos "negativos" o "inversos" para los dólares en billete; es decir, que la que se vuelve "rara" es la moneda local, que se vende en la calle por encima de su valor oficial. Este es, por ejemplo, el fenómeno del dólar "Ocoña", nombre de la avenida donde ocurrieron los primeros casos de cambio informal en Lima. Al investigar en esa ciudad, hemos encontrado situaciones tan increíbles como que unos banqueros iban a comprar dólares en la calle para volver a venderlos en sus ventanillas de cambio.

Búsqueda de una política alternativa

Las acciones destinadas al control y gradual reducción del narcotráfico en la región han sido hasta ahora de carácter eminentemente "cíclico" y represivo, sin que les acompañasen programas de transformación estructural a largo plazo. Las medidas aplicadas en los últimos años parecen haber desfavorecido sobre todo a los pequeños agricultores, pero no han afectado sustancialmente a

los cultivadores en gran escala y a los traficantes de droga responsables de la fuga de capitales y del blanqueo de dinero, auténticos causantes de la persistencia y agravamiento del problema. En presencia únicamente de medidas de control y represión se puede asistir, a nivel regional, a fenómenos como el desmoronamiento del precio de la droga, la subida del desempleo y el retorno a la miseria de miles de personas. Por otro lado, en el plano nacional, las políticas represivas no parecen haber contribuido sustancialmente a reducir los volúmenes de producción y exportación.

Numerosos testimonios recogidos demuestran que los cultivos de cannabis han vuelto a aparecer en el departamento del Cauca, Caqueta y en la montaña de San Lucas, pero, y esto es un fenómeno totalmente nuevo en Colombia, su objetivo no es la producción de marihuana, sino la extracción de hachís, destinado probablemente a la exportación. Otra razón que explica el alza de los precios de la coca es que una parte de las superficies en que antes se cultivaba, ahora produce opio. Actualmente se estima en más de 20.000 hectáreas la superficie sembrada de amapola en las montañas colombianas, a pesar de las más de 12.000 hectáreas destruidas mediante fumigación aérea con el temible insecticida 2-4D (el conocido *agente naranja*).

En los tres países más afectados en la actualidad, Colombia, Bolivia y Perú, se ha producido una evolución hacia estrategias globales y más orientadas hacia el contexto socio-económico e internacional del problema de la droga que las políticas meramente policiales o de erradicación. En Bolivia, los campesinos temen ser las únicas víctimas de la lucha contra los narcotraficantes, enfrentamiento que va militarizándose cada día más. Durante la cumbre de Cartagena, en 1991, el presidente boliviano Jaime Paz Zamora declaró: "Debemos luchar contra el narcotráfico, pero no a costa del empobrecimiento".

El gobierno colombiano ha reforzado la represión del narcotráfico a través del asalto a los centros de producción, la incautación de bienes, la captura de los principales traficantes y la destrucción de sus instalaciones clandestinas. Varios sectores de la sociedad colombiana han cuestionado abiertamente la estrategia antidroga vigente por los altos costes humanos y económicos que ha ocasionado. Se ha argumentado que la estrategia dominante hasta ahora, la policial, no sólo no ha alcanzado los resultados deseados sino que ha supuesto una represión exagerada, contribuyendo a alimentar la espiral de violencia.

Algunos analistas han señalado cierta inconsistencia en la política antidroga del gobierno colombiano: de forma casi cíclica, a períodos de recrudecimiento de la represión les suceden etapas de actitudes más condescendientes hacia el narcotráfico, en las que

han llegado a circular rumores sobre negociaciones secretas del gobierno con los narcotraficantes. Esta ambivalencia parece reproducirse en el plano de la política económica con medidas fiscales que, en la práctica, han permitido la incorporación de dinero de origen ilegal en el circuito económico de Colombia. Pero, como ha mostrado la intervención del gobierno mexicano en Chiapas, no es fácil negociar con Estados Unidos, solamente preocupado por criterios de política interna, lo que ha limitado de manera importante la formulación de una política coherente e independiente por parte de Colombia.

El Programa Especial de Cooperación, elaborado por la presidencia de la República, comprende un conjunto de iniciativas para afrontar tanto las causas socio-económicas que fomentan el narcotráfico como sus consecuencias. Estas incluyen la promoción del comercio internacional, el desarrollo industrial, agroindustrial y rural, la sustitución de cultivos ilícitos, un plan de rehabilitación para drogadictos, medidas de apoyo a la justicia y la creación de un fondo para asegurar la libertad de prensa.

Las organizaciones internacionales conceden una gran importancia a los cultivos de sustitución. Así, el Programa de Control de las Drogas de las Naciones Unidas (PCDNU) ha desarrollado unos proyectos pilotos en Bolivia, Perú y Colombia. Tal y como subrayó un alto cargo del gobierno boliviano: "Los campesinos seguían produciendo coca, pero hacen también un poco de leche y un poco de frutos tropicales. ¡Eso es un progreso!"¹⁷ Sin embargo, según un informe del Centro de Investigación y de Desarrollo Regional (CIDRE) de Cochabamba, el criterio más importante para los campesinos es la garantía del transporte de las hojas de coca dada por los narcotraficantes, cuando esta garantía no existe para otros cultivos.

17. Dominique Dhombres, "Les Nations-Unies aident la Bolivie à remplacer les plantations de coca par des cultures légales", *Le Monde*, París, 8 febrero 1995.